



## **Observatorio Local**

IDEAS GLOBALES PARA EL GOBIERNO LOCAL

**EJEMPLAR PROMOCIONAL**



Observatorio Local. Ideas Globales para el Gobierno Local es una publicación especialmente dirigida al mundo local de Observatorio de las Ideas S.L.

---

COORDINACIÓN EDITORIAL

Elena Costas, doctora en Economía y fundadora de KSNET.

---

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:

Josep Antoni Báguena

Jordi Baltà

Lluís Camprubí

Joan Frigols

Eduard Güell

Benjamín Augusto López

Lluís Medir

Luis Martín

Pol Morillas

Andreu Orte

Esther Pano

Bárbara Pons

Carles Rivera

Jordi Rosell

Paula Salinas

Elisa Stinus Bru de Sala

Mariona Tomàs

Francesc Trillas

Joan-Josep Vallbé

Ferran Vallespinós

---

EDITA

**Observatorio de las Ideas S.L.**

CONSEJERO DELEGADO

Daniel Fernández

CIF B65855868

Diputación 262 2ª 08007  
Barcelona Tel. 93 494 97 20

[www.observatoriodli.com](http://www.observatoriodli.com)

ISSN: 2339-9562

D. Legal B.10113-2014



**Observatorio Local**

IDEAS GLOBALES PARA EL GOBIERNO LOCAL

## | IDEAS DE INTERÉS |

### EL EFECTO DE UNA RESPUESTA POLICIAL RÁPIDA SOBRE LA RESOLUCIÓN DE DELITOS

Reseña de **Andreu Arenas** sobre «The Effect of Police Response Time on Crime Clearance Rates».

### ¿CONTRIBUYEN LOS VTC A REDUCIR LA DEPENDENCIA DEL VEHÍCULO PRIVADO Y A MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DE LAS CIUDADES?

Reseña de **Andreu Orte** sobre «Ride-Hailing, Travel Behaviour and Sustainable Mobility: An International Review».

### LOS MODELOS CONVIVENCIALES COMO RESPUESTA A LAS NECESIDADES RESIDENCIALES DE LAS PERSONAS MAYORES

Reseña de **Clara Costas** sobre «Is Co-Living a Housing Solution for Vulnerable Older People?».

### CÓMO LA INFORMACIÓN INFLUYE EN EL APOYO SOCIAL HACIA POLÍTICAS REDISTRIBUTIVAS

Reseña de **Paula Salinas** sobre «Educational Inequality and Public Policy References: Evidence from Representative Survey Experiments».

## | LIBROS |

### LA POBREZA INFANTIL: LA ASIGNATURA PENDIENTE DE ESPAÑA

*La infancia que queremos. Una agenda para erradicar la pobreza infantil*, de Pau Marí-Klose





Estimados lectores,

Vivimos tiempos convulsos y de constantes cambios, pues nuestra sociedad y modo de vida se ha visto modificada por la pandemia de la COVID-19. Pero son muchos otros los problemas que, virus aparte, seguimos sufriendo y necesitan ser revisados. Uno de los más significativos en nuestro país es, sin duda, la pobreza infantil: España cuenta con una de las tasas de pobreza infantil más elevadas entre los países europeos, y esta coyuntura se está viendo fuertemente agravada, además, con la actual crisis económica y social. Por ello hemos seleccionado como libro del mes *La infancia que queremos*, de **Pau Marí-Klose**, que nos acerca de forma clara y esperanzadora a este problema y sus soluciones.

Incluimos también cuatro ideas de interés principal para las políticas locales. La primera de ellas es un estudio llevado a cabo por **Jordi Blanes i Vidal** y **Tom Kirchmaier** sobre la policía y lo que significa una respuesta policial rápida: cuando el delito se asigna a una comisaría cercana, la probabilidad de que dicho delito se resuelva aumenta de forma muy significativa.

En la segunda, el profesor **Alejandro Tirachini** resume las principales aportaciones internacionales en literatura sobre los servicios de VTC, que tanta polémica han creado en los últimos tiempos.

**Gemma Burguess** y **Valentine Quinio** analizan el creciente interés en soluciones de *co-living* y *co-housing* para la gente mayor, medidas que responden a la voluntad de cubrir las necesidades residenciales generadas por los cambios demográficos y sociales derivados de la llegada de la generación de los *baby-boomers* a la jubilación, especialmente en términos de soledad y aislamiento social.

Y, por último, la cuarta idea se basa en el análisis de **Philipp Lergetporer**, **Katharina Werner** y **Ludger Woessmann** sobre la desigualdad educativa, un tema que preocupa a la población, predispuesta a políticas dirigidas a mejorar la equidad educativa como, por ejemplo, la escolarización obligatoria en educación infantil.

Confío en que estos temas sean de su interés y resulten de utilidad en su día a día.

Con mis mejores deseos de salud,

**El editor**

## EL EFECTO DE UNA RESPUESTA POLICIAL RÁPIDA SOBRE LA RESOLUCIÓN DE DELITOS

- **Publicación:** « The Effect of Police Response Time on Crime Clearance Rates », *Review of Economic Studies*, vol. 85, n.º 2, abril de 2018, págs. 855-889. Disponible en: <https://academic.oup.com/restud/article-abstract/85/2/855/4104675>
- **Autores:** **Jordi Blanes i Vidal** y **Tom Kirchmaier** son investigadores en la London School of Economics y en la Copenhagen Business School, respectivamente.
- **Síntesis:** **Andreu Arenas**, doctor en Economía, profesor lector en el Departamento de Economía de la Universitat de Barcelona e investigador en el Instituto de Economía de Barcelona.

### SÍNTESIS DE LA IDEA

*Resumen: Esta investigación estudia el efecto del tiempo de respuesta de la policía municipal para que un delito se resuelva. Se centra en los delitos que se producen en la frontera entre la zona de influencia de distintas comisarías en el área metropolitana de Manchester, y que de forma prácticamente aleatoria se asignan a comisarías distintas: en algunos casos, a comisarías más cercanas; en otros, a otras más lejanas, cuyos agentes suelen llegar más tarde al lugar de los hechos. Los resultados muestran que, cuando el delito se asigna a una comisaría más cercana, la probabilidad de que el delito se resuelva aumenta de forma muy significativa, especialmente en caso de robos. Esto se produce por un incremento tanto de la probabilidad de arresto como de encontrar testigos de calidad. Los resultados sugieren que invertir en reducir el tiempo de respuesta tiene importantes beneficios económicos, que compensarían con creces el coste de la inversión.*

Las administraciones públicas destinan cantidades ingentes de dinero a mejorar la seguridad pública, una parte fundamental de la cual consiste en la probabilidad de arrestar o identificar a presuntos delincuentes, de forma que se resuelvan delitos y se eviten patrones de reincidencia. Por este motivo, es fundamental entender cuál es el impacto sobre la seguridad pública de distintas medidas y políticas públicas, para poder tomar decisiones ponderando costes y beneficios.

En este artículo, los autores se centran en una práctica operativa de la policía local, que consiste en priorizar un desplazamiento rápido al lugar de los hechos cuando se les alerta de un potencial delito. De entrada, puede parecer obvio que una respuesta más rápida vaya a tener mayores beneficios: una patrulla que llegue antes al lugar de los hechos debería de tener una mayor probabilidad de arrestar al presunto delincuente o de encontrar testigos, o incluso de evitar la destrucción o contaminación de pruebas. Sin embargo, esta conclusión no forma parte del consenso existente en criminología. La opinión mayoritaria es que, por muy rápida que sea la respuesta, siempre que ésta sea superior a un minuto la probabilidad de arresto es muy baja. Por tanto, los beneficios potenciales de invertir recursos en una respuesta policial más rápida serían muy bajos. Sin embargo, es muy difícil verificar empíricamente esta conclusión, porque es complejo medir el tiempo de respuesta con exactitud, y los delincuentes se adaptan continuamente a las prácticas policiales y viceversa, lo que dificulta la medición y la separación de la causa y el efecto.

Los autores disponen de una base de datos y un caso de estudio ideal para entender hasta qué punto los beneficios en responder más rápido a los avisos de crímenes son sustanciales. El estudio se centra en la ciudad de Manchester, en Reino Unido. Allí, la policía emplea a más de 6000 agen-

tes que se encargan de su área metropolitana, con una población de más de dos millones de personas. Sin embargo, actúan de forma descentralizada, pues cada comisaría tiene asignada una zona de influencia. Cuando se recibe una llamada alertando de un delito, ésta es asignada a una comisaría en función de la zona, y las patrullas suelen partir desde la comisaría asignada hacia el lugar de los hechos. En consecuencia, la policía llega más rápido cuando los delitos se producen más cerca de la comisaría.

Lo interesante de este estudio, que además permite a los autores mejorar análisis anteriores, es que, cuando el delito se produce en la frontera entre dos áreas de influencia distintas, el delito se asigna a una de las dos comisarías de forma prácticamente aleatoria. A veces, una de ellas está mucho más cerca; en estos casos, se produce un experimento: de forma aleatoria, los agentes llegan más o menos rápido al lugar de los hechos.

Los resultados evidencian que, cuando una llamada se asigna a una comisaría más cercana, la probabilidad de que se resuelva el delito aumenta de forma significativa. En concreto, una respuesta un 10 % más rápida incrementa la probabilidad de resolución del delito en un 4,7 %. Los delitos para los que la rápida respuesta es más relevante son los robos: si la comisaría está próxima, es mucho más probable que se produzca un arresto de forma inmediata o que los agentes encuentren testigos o pruebas capaces de identificar a un sospechoso. Estos efectos no se limitan a la posibilidad de resolver el delito, sino que se extienden a la rapidez con que se resuelven. Un aspecto crucial para que el experimento sea válido es que los potenciales delincuentes no se den cuenta de que, si actúan a pocos metros de distancia, el tiempo de respuesta policial varía; sin embargo, el número de delitos a ambos lados de las zonas de influencia fronterizas es idéntico, lo que sugiere que no es el caso.

Los autores no sólo estudian el efecto de asignar un delito a una comisaría más cercana, sino que también tienen en cuenta si la llamada se asigna a una comisaría con un equipo de respuesta telefónica más numeroso. Esto es especialmente interesante, porque permite realizar un análisis coste-beneficio con gran precisión. Así, estudian hasta qué punto se reduce el tiempo de respuesta y de llegada al lugar del crimen cuando hay agentes de baja, y encuentran que, si eso ocurre, la respuesta es más lenta y la probabilidad de resolver delitos, más baja. Este cálculo es interesante porque permite comparar el coste de contratar a un agente adicional con los beneficios que supondría en la resolución de delitos. El beneficio se mide a partir de estimaciones de delitos prevenidos a partir de arrestos, y se descuentan los costes procesales y potencialmente de encarcelamiento. El beneficio neto final de contratar un agente adicional se estima en un 170 % de su salario, lo que indica que existe mucho margen de mejora en el sistema. Los autores estiman que este beneficio es un cálculo conservador, porque, si el tiempo de respuesta mejorara de forma sistemática (y no aleatoria, como en este estudio), es probable que, para empezar, una mayor probabilidad de arresto y de ser identificado por un testigo reduzcan el atractivo de delinquir.

En conclusión, este estudio muestra de forma convincente que una respuesta más rápida por parte de la policía puede tener un efecto sustancial y positivo para reducir la criminalidad, y que además el coste que ello supondría mediante la mejora de los equipos de respuesta telefónica es bastante reducido en comparación con sus beneficios. Asimismo, los resultados sugieren que es fundamental prestar atención al diseño de las zonas de influencia asignadas a cada comisaría.

## ¿CONTRIBUYEN LOS VTC A REDUCIR LA DEPENDENCIA DEL VEHÍCULO PRIVADO Y A MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DE LAS CIUDADES?

- **Publicación:** «Ride-Hailing, Travel Behaviour and Sustainable Mobility: An International Review», *Transportation*, 2019, págs. 1-37. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11116-019-10070-2>
- **Autor:** **Alejandro Tirachini**, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
- **Síntesis:** **Andreu Orte**, técnico superior de Políticas Públicas en la Diputación de Barcelona y doctor en Ciencias Políticas y Sociales.

### SÍNTESIS DE LA IDEA

*Resumen: Existe un creciente interés por conocer mejor los servicios VTC en las ciudades sobre la reducción del vehículo privado y la mejora de la calidad del aire y la reducción del gasto de los hogares en transporte. En este artículo se resumen las principales aportaciones internacionales a esta literatura, especialmente en Estados Unidos, Canadá, China, la India y Chile, complementadas con otras publicaciones.*

La creación de Uber el año 2009 fue considerada en su momento una innovación en la movilidad urbana, que también se ha visto transformada por el crecimiento de otros servicios, como el *sharing* de patinete, bicicleta y motocicleta, servicios de coche compartido sin conductor o de coche compartido entre particulares y transporte a demanda. La principal aportación de los VTC ha sido ofrecer una *app* en la cual conductores privados ofrecen servicios de transporte, en oposición al tradicional modelo de taxis y otros servicios de vehículo con conductor profesional. La idea de negocio fue rápidamente replicada por otras empresas (Lyft, Cabify, Ola o DiDi Chuxing), y se conocen ya con el término *Ride hailing* o las siglas VTC (Vehículos de Transporte con Conductor).

En los últimos cinco años, los VTC han crecido en popularidad. Un estudio del Pew Research Center mostró que el porcentaje de población norteamericana que usaba servicios VTC pasó del 15 % al 36 % entre los años 2015 y 2018, y el conocimiento de su uso y existencia del 67 % al 97 %. El caso paradigmático y que ha tenido mayor interés de análisis en EE UU es el de San Francisco, sede de las principales nuevas empresas tecnológicas.

A medida que estos nuevos servicios de movilidad han conseguido mayor aceptación, han emergido también los debates sobre sus potencialidades, sus debilidades, su regulación y sus estrategias de promoción. En el caso concreto de los VTC, los principales debates los han protagonizado sus antagonistas, los taxis, y la complementariedad de ambos servicios en un contexto de segmentación de usuarios.

Los *think tanks*, academias y estudios de mercado a menudo se han centrado en Estados Unidos o China. Por otro lado, las fuentes de información raramente se sustentan en bases de datos de usuarios y conductores cedidas por los VTC, abundando en las encuestas y aproximaciones al impacto en el tráfico de las ciudades ofrecidas por registros administrativos municipales o la cesión de datos del sector del taxi.

### **¿Quién usa más los VTC?**

Tirachini identifica en Canadá y Estados Unidos una mayor tendencia de uso entre personas de renta media-alta, jóvenes y con alto nivel educativo, lo cual queda relacionado con el uso de *apps* de móvil y con unos valores considerados como liberales y progresistas. En China, ese retrato robot es ligeramente distinto, ya que un 53 % de los usuarios de DiDi en 2019 no disponían de formación superior.

Por otro lado, el hecho de vivir en un lugar más poblado incrementa la probabilidad de uso de VTC. Sin embargo, la frecuencia es fundamentalmente esporádica (algunas veces al mes), lo cual no es distinto de los servicios de taxi. La intensidad de uso crece conforme a mayor nivel de renta y decrece a mayor edad, según estudios de California, Santiago de Chile y Nueva Delhi, si bien muestra resultados menos coincidentes en Los Ángeles y Nueva York. Estas inconsistencias requieren de nuevos análisis comparados sobre la accesibilidad del transporte público, las distancias al trabajo y los niveles de propiedad de vehículo privado.

De hecho, la relación entre la intensidad del uso del VTC y la propiedad de vehículo privado también está en entredicho. Las empresas de VTC justificaban los beneficios de sus servicios porque permitían reducir los coches en propiedad y la multimodalidad.

### **¿Por qué se usan los VTC?**

Esta pregunta es relevante para interpretar las percepciones de los usuarios, pero también porque permiten contraponer los servicios VTC a otras alternativas de movilidad (taxi, transporte público, vehículo propio u otros). El ecosistema tecnológico, la transparencia en los precios y el hecho de poder hacer el trayecto puerta a puerta sin esperas son las características más utilizadas por las empresas para promover sus servicios.

Pero ¿son coincidentes con los motivos esgrimidos por los usuarios? La literatura explica que no existen unos motivos comunes en los ámbitos analizados. Sin embargo, los elementos propios de los VTC no existentes siempre en otros medios más tradicionales suelen ser los más destacados. Éste sería el caso del pago con tarjeta o la previsión de duración del trayecto. Otros elementos distintivos, como la identificación del conductor, el coste de antemano o la posibilidad de reservar el vehículo también son relevantes, si bien no aparecen como opciones en todos los estudios.

En cuanto a los motivos de viaje, el principal motivo en todos los estudios es el ocio, seguido del trabajo, con la excepción de China, que aún varias opciones en una sola categoría (trabajo y estudio), con un 41 %.

### **¿Sustituye a otros medios de transporte?**

La capacidad de los VTC de ser considerados aliados para el gobierno de las ciudades pasa, en buena medida, por la capacidad de reducir la dependencia del vehículo privado y de su complementariedad con medios de transporte más sostenibles y eficientes.

La principal conclusión es que el taxi es el principal servicio sustituido, seguido por el transporte público y el coche privado. En Chile, Brasil y China la sustitución del vehículo privado es inferior al resto de países, al contrario que en Estados Unidos, con la excepción de San Francisco (que, junto a Nueva York resulta un caso muy particular y con conclusiones muy distintas, dependiendo de si se tiene en cuenta un ámbito geográfico restringido a la ciudad o bien a un área metropolitana muy extensa).

En todo caso, la idea inicial de que los VTC ayudan a reducir la compra de vehículo privado no es todavía concluyente ni relevante, y Tirachini apunta a la necesidad de analizar otros efectos geográficos y del contexto económico. Sin embargo, las empresas VTC contribuyen a menudo a vincular su imagen con el sector automovilístico y acuerdan condiciones de compra o *leasing* de vehículos para sus conductores.

Por otro lado, los VTC no implican necesariamente que sean complementarios del transporte público ni lo sustituyan, puesto que los estudios no consideran el impacto neto en la demanda de transporte público. Sin embargo, Tirachini se inclina a pensar que el efecto sustitución prima por encima de la complementariedad. En Estados Unidos, se ha estimado que Uber y Lyft redujeron entre un 1,3 % y un 1,7 % el uso del autobús y el tren. Y en la India, una huelga de conductores de VTC permitió observar un incremento en la demanda de metro de alrededor del 2 %.

Ciertamente, este efecto de sustitución es un síntoma que permitiría a los operadores de transporte público plantear estrategias para promover la intermodalidad o bien rediseñar líneas que permitan capturar demanda no satisfecha.

### **¿Contribuyen los VTC a la contaminación?**

Los VTC sufren el peso de compartir con los coches el estigma de ser una solución poco sostenible y eficiente para las necesidades de transporte de millones de personas. Las carreteras, accesos y calles de las grandes ciudades sufren diariamente un continuo flujo de vehículos con una ocupación baja y un uso de espacio público elevado, lo cual genera congestión. El principal indicador para medir si los VTC contribuyen a mejorar el tráfico y la contaminación es el cálculo de los kilómetros recorridos por los vehículos en las ciudades.

El autor señala un cambio de tendencia. Hasta 2017, se creía que los efectos de los VTC por kilómetros eran relativamente nulos o incluso positivos, tal como destacaban las distintas empresas: si se reduce el uso de coche privado y se optimiza la ocupación media por vehículo, se observaría ese efecto. A partir de ese año, la mayoría de los estudios publicados han llegado a conclusiones distintas, pues se considera que los VTC no reducen el tráfico.

Por último, el hecho de que los VTC tengan su principal hora punta fuera de las horas de mayor tráfico (viernes y sábados por la noche) explicaría que no fueran causantes de mayores niveles de congestión. Sin embargo, no existen resultados claramente concluyentes ni comparables, a causa de las dificultades en la construcción de contrafactuales (qué ocurriría en ausencia de VTC), con la excepción de casos de huelga en el sector VTC analizados en la India, en los cuales se registraron reducciones en los niveles de tráfico en horas punta.

## LOS MODELOS CONVIVENCIALES COMO RESPUESTA A LAS NECESIDADES RESIDENCIALES DE LAS PERSONAS MAYORES

- **Publicación:** «Is Co-Living a Housing Solution for Vulnerable Older People?», *Literature review*, Cambridge Center for Housing and Planning Research / Nationwide Foundation y Nationwide Building Society, agosto de 2019. Disponible en: [http://www.nationwidefoundation.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/Final-report-coli-ving-\\_-web-version.pdf](http://www.nationwidefoundation.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/Final-report-coli-ving-_-web-version.pdf)
- **Autores:** **Gemma Burgess** es directora e investigadora asociada principal en el Centro de Cambridge para la Investigación de Vivienda y Planificación, así como subdirectora adjunta y miembro del St. Edmund's College. **Valentine Quinio** es asistente de investigación en el mismo centro de Cambridge, especializada en políticas urbanas.
- **Síntesis:** **Clara Costas**, socióloga, técnica urbanística y DEA en Geografía Humana, es coordinadora del Proyecto Radars, programa del Ayuntamiento de Barcelona que lucha para paliar la soledad de las personas mayores vinculándolas de nuevo a su comunidad.

### SÍNTESIS DE LA IDEA

*Resumen: El creciente interés en soluciones de co-living y co-housing para gente mayor responde a la voluntad de cubrir las necesidades residenciales generadas por los cambios demográficos y sociales derivados de la llegada de la generación de los baby-boomers a la jubilación, especialmente en términos de soledad y aislamiento social.*

El acelerado incremento de mayores de 65 años respecto al resto de grupos de edad en todo el mundo está dejando a la vista la carencia de soluciones residenciales seguras y adaptadas a las nuevas necesidades e intereses del mercado libre. Por ello, a partir de una revisión de la literatura internacional existente sobre los modelos de *co-living* y *co-housing* (mayormente de los países escandinavos, Alemania, los Países Bajos y EE UU) y una evaluación de iniciativas concretas existentes en el Reino Unido, este informe estudia el estado de la cuestión a nivel nacional.

El término *co-living* («convivencia») hace referencia a un modelo residencial que combina espacios de vida privados con instalaciones comunes compartidas, que busca explícitamente promover el contacto social y construir un sentimiento de comunidad. Por su parte, *co-housing* («covivienda») es un modelo concreto de *co-living* en el que las personas deciden vivir en un entorno grupal en el que se prioriza la gobernanza de los residentes y toda la comunidad participa activamente en la planificación, desarrollo y la gestión del *co-housing* (desde a la realización de las comidas hasta el cuidado del jardín), así como en el disfrute de actividades de ocio compartidas.

Aunque *co-housing* y *co-living* son modelos aplicables a todas las etapas de la vida (por ejemplo, en las épocas estudiantiles, aunque suponen también un buen modelo para las familias que desean criar a sus hijos en un ambiente comunitario intergeneracional), acostumbran a estar vinculados a las personas mayores, por su capacidad de dar respuesta a problemáticas que se magnifican en la vejez, como la soledad y el aislamiento, que pueden conducir a la depresión.

## **Evolución de los modelos residenciales de convivencia**

Los formatos de convivencia surgieron en los países escandinavos a finales de los años 60. Su popularidad está actualmente creciendo en Europa y EE UU a causa de diversos factores, que van desde la carencia de oferta de viviendas económicamente accesibles y de calidad hasta la necesidad de romper la anonimidad de los vecindarios actuales. Para aportar seguridad a los convivientes, todos los modelos de *co-living* cuentan con un marco legal específico que permite minimizar los riesgos de las personas implicadas.

En Reino Unido, la Estrategia Nacional de Vivienda para una Sociedad que Envejece (2008) enfatiza la importancia que una buena vivienda tiene en la calidad de vida de los mayores de 65 años. Pese a ello, se constata que se ha avanzado muy poco en la mejora de las condiciones de las viviendas de las personas mayores más vulnerables, que residen mayoritariamente en casas del mercado general. La principal forma de *co-living* allí son las casas compartidas (*homeshare*), una persona mayor que dispone de una habitación libre la comparte con una persona con pocos recursos (para quien es difícil acceder al mercado libre de vivienda), existiendo un modelo específico de convivencia con menores de 25 años. A cambio, el inquilino ofrece compañía y apoyo en las tareas de la vida diaria (hacer la compra, cocinar, cuidar el jardín o limpiar, excluyéndose tan sólo los cuidados personales). Este intercambio puede darse con o sin coste, y ambas partes pueden pagar una cuota mensual a los gestores de los programas de convivencia (como HomeShare International, que opera en catorce países del mundo, incluido España).

Este modelo está en crecimiento en Reino Unido, donde se inició en 1993, y actualmente cuenta con 27 entidades promotoras, ya que está fomentado por las Asociaciones de Vivienda, a quienes un grupo temático parlamentario anima a aprovechar sus habilidades y experiencia para ayudar al incipiente movimiento de convivencia de la tercera edad en todas sus formas.

Por su parte, el *co-housing* se encuentra en un momento incipiente, ya que tan sólo se conocen 19 comunidades (frente a las 600 de Alemania), siendo diez de ellas exclusivas para personas mayores (230 en los Países Bajos). La diversidad de modelos y la ausencia de un registro de *co-living* general en Reino Unido dificultan la evaluación del sector. Pese a ello, se constata que se está realizando un esfuerzo en ponerse al día, ya que se cuentan como mínimo 60 comunidades más en desarrollo.

## **Beneficios de la convivencia identificados en la literatura**

La revisión de la literatura demuestra que el *co-housing* es una forma de inversión en capital social para las personas que se enfrentan a la soledad y el aislamiento. Constituye una opción de apoyo informal, de cuidado mutuo y tareas domésticas, y, en tanto que mantiene a las personas mayores activas, comporta una mejora en el estado físico y la salud mental. Ello implica reducción de las demandas (y, por tanto, costes) de los servicios sociales y de salud, ya que las pequeñas ayudas prácticas y el apoyo emocional tienen un gran impacto en el bienestar y la salud de los residentes.

Cada lira invertida en proyectos piloto de reducción de soledad y aislamiento social reduce en un 47 % los ingresos hospitalarios, con lo que los costes sanitarios disminuyen en general en 2337€ por persona. Se estima también que compartir hogar significa una reducción en los gastos derivados del riesgo de accidentes en el hogar, de contratación de empleados del hogar y de uso de servicios de salud mental.

Los beneficios de los programas intergeneracionales son similares: se registran mejoras en el bienestar de las personas mayores en cuanto al estado anímico, la reducción de la ansiedad y una

mayor confianza en sus capacidades motoras y de movilidad. El intercambio de conocimiento con los jóvenes les permite también incrementar sus aptitudes en nuevas tecnologías, mientras que los primeros perfeccionan sus habilidades culinarias, el idioma o adquieren un mayor poder adquisitivo debido al reducido alquiler y/o cuota que pagan.

Sin embargo, se detectan ciertas lagunas en la literatura, en tanto que existen más experiencias concretas de las que han sido analizadas, especialmente en Reino Unido. Existen una serie de obstáculos en el desarrollo de nuevos *co-housing*, como los costes del suelo, la dificultad de encontrar espacios adecuados o de coordinación con las administraciones locales, la inexistencia de políticas concretas de apoyo, la carencia de un liderazgo a nivel nacional o la dificultad de coordinación y creación de los grupos o unidades de convivencia.

En este sentido, se concluye que el rol de los gobiernos locales es clave para el desarrollo de soluciones alternativas de *co-living* y *co-housing*. Aunque bien es cierto que el creciente interés está incentivando que colaboren con una diversidad de actores públicos y privados, así como la creación de medidas adaptadas a las necesidades locales, como la priorización en la gestión de solicitudes (los países escandinavos, Países Bajos y Alemania permiten el acceso preferencial al suelo las iniciativas de *co-housing*) o la concesión de subvenciones.

## CÓMO LA INFORMACIÓN INFLUYE EN EL APOYO SOCIAL HACIA POLÍTICAS REDISTRIBUTIVAS

- **Publicación:** «Educational Inequality and Public Policy References: Evidence from Representative Survey Experiments», *Journal of Public Economics*, n.º 188, 2020. Disponible en el siguiente enlace: <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104226>
- **Autores:** Philipp Lergetporer, Katharina Werner y Ludger Woessmann, todos ellos miembros del ifo Institute (CESifo) de la Universidad de Múnich (Alemania), y Woessmann también de IZA (Alemania) y CAGE (Reino Unido).
- **Síntesis:** Paula Salinas, doctora en Economía y cofundadora de KSNET.

### SÍNTESIS DE LA IDEA

*Resumen: Los autores analizan que conocer información sobre la desigualdad educativa existente lleva a que la población aumente su preocupación sobre tema y a apoyar políticas dirigidas a mejorar la equidad educativa como, por ejemplo, la escolarización obligatoria en educación infantil.*

La desigualdad educativa, determinada en gran medida por la fuerte vinculación entre las características socioeconómicas de las familias y los resultados académicos de los escolares, tiene importantes implicaciones en términos de falta de igualdad de oportunidades y desigualdad económica. Cada vez más, el mercado de trabajo premia los conocimientos y habilidades de los trabajadores, por lo que las políticas para mejorar la igualdad de oportunidades educativas –que el éxito académico de los alumnos no se vea determinado por la condición social o económica de sus familias– como vía para reducir las desigualdades económicas de un país se encuentran actualmente en el centro del debate.

Pero que un gobierno pueda desarrollar políticas de igualdad educativa dependerá de las preferencias de la población en relación a este tipo de políticas. No obstante, existen pocos estudios que analicen cuáles son los determinantes de estas preferencias. El estudio que nos ocupa hace una primera aproximación a esta cuestión, analizando cómo las preferencias de la población alemana en cuanto a las políticas de reducción de la desigualdad educativa se ven alteradas cuando reciben información sobre la situación real existente en el país y sus principales consecuencias.

Para poder analizar el tema, se lleva a cabo un experimento en dos muestras representativas de la población alemana en edad de votar. Consiste en crear dos grupos de personas, seleccionadas de forma aleatoria. A una de estas muestras, llamada «grupo de tratamiento», se le proporciona información sobre la situación de la desigualdad educativa en Alemania, sus causas y sus consecuencias a lo largo de toda la vida de las personas implicadas, y después se le hacen unas preguntas sobre sus preferencias en relación a una serie de políticas educativas. Concretamente, se les muestran los datos gráficamente, acompañados del siguiente texto: «Numerosos estudios muestran que el éxito educativo en infantil, en la escuela y en la universidad depende fuertemente del origen social y de las circunstancias de renta familiar en las que se encuentran los niños, las niñas y los adolescentes. Por ejemplo, un estudio ha demostrado que los resultados en matemáticas de los estudiantes de 15 años de origen más desaventajado se encuentran, en promedio, cuatro cursos escolares por detrás de los resultados de aquellos más aventajados». A la otra muestra, llamada «grupo de control», se le hacen las mismas preguntas, pero sin haberles proporcionado previamente ninguna información.

Los resultados evidencian que, en términos generales, la sociedad alemana presenta una alta preocupación sobre la desigualdad educativa. Así, un 55,4 % de los individuos que no han recibido ninguna información considera que la desigualdad educativa es un problema grave o muy grave. No obstante, este porcentaje aumenta hasta el 67,8 % en el caso de los individuos que han recibido la información. Este efecto es mayor aún en aquellos que, antes de recibir la información, subestimaban la magnitud del problema, y permanece cuando se vuelve a entrevistar a los individuos que participan en el experimento al cabo de dos semanas.

Además, el estudio plasma que en Alemania existe una amplia base social que apoya políticas dirigidas a reducir la desigualdad educativa. Concretamente, las políticas analizadas son: proveer educación infantil gratuita para las familias de bajos ingresos; introducir la escolarización obligatoria en infantil; incrementar el gasto público en escuelas con un número elevado de estudiantes en desventaja social; posponer la separación en función de las habilidades; proveer complementos salariales a los profesores que trabajan en escuelas con muchos estudiantes en desventaja social; introducir educación a tiempo completo para todos los estudiantes; integrar a los alumnos con necesidades especiales con el resto de alumnos e incrementar el gasto público para becas universitarias. En seis de estas ocho políticas existe una mayoría a favor de las mismas, incluso en el grupo de control al que no se le da información alguna. Es decir, aunque la población tienda a subestimar la desigualdad educativa existente, son políticas populares, con un amplio consenso social a favor de las mismas.

Posiblemente como consecuencia de este amplio consenso, el efecto de proveer de información sobre la desigualdad existente tiene un impacto positivo sobre el apoyo de la población hacia las políticas, si bien este impacto es cuantitativamente reducido, de tan solo 2,4 puntos porcentuales. La consecuencia más elevada es la que se observa en la escolarización obligatoria en la etapa de infantil, si bien ésta también es limitada. Por tanto, si bien la provisión de información sobre la desigualdad educativa tiene un efecto relevante en la mayor o menor preocupación de la gente sobre ello, su efecto sobre las preferencias hacia políticas redistributivas es limitado.

Los autores también analizan el porqué de este efecto limitado, pero no consiguen una explicación. De hecho, estudian toda una serie de hipótesis, si bien los resultados obtenidos los llevan a prescindir de ellas. Así, descartan que se deba a que la población no vincule su preocupación por la desigualdad con las políticas que tienen como objetivo combatirla, que duden sobre la efectividad de estas políticas para combatir la desigualdad o que tengan un bajo nivel de confianza en las instituciones.

Finalmente, que exista un amplio consenso a favor de este tipo de políticas redistributivas plantea la cuestión de por qué no se aplican. Una posible explicación es que, al ser políticas con efectos a muy largo plazo, en contraste con otro tipo de políticas redistributivas de efectos más inmediatos, los incentivos políticos por implementarlas sean más limitados.

# LA POBREZA INFANTIL: LA ASIGNATURA PENDIENTE DE ESPAÑA

---

**Publicación:** *La infancia que queremos. Una agenda para erradicar la pobreza infantil*, Libros de la Catarata, Madrid, 2019.

Por **Pere A. Taberner**

*¿Por qué este libro?*

España cuenta con una de las tasas de pobreza infantil más elevadas entre los países europeos. Los menores son el grupo de edad de la población española que sufre mayor vulnerabilidad socioeconómica y el único con un aumento de su tasa de riesgo de pobreza durante el último año (según los datos de la ECV, 2019). Además, el sistema de protección social resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la población infantil y sus familias. Y esta coyuntura se está viendo fuertemente agravada con la actual crisis económica y social provocada por la COVID-19. La infancia se quedó confinada en sus hogares sin poder salir, mientras los adultos a su cargo veían reducir sus ingresos y el sistema educativo no estaba preparado para afrontar un cambio de esta envergadura. Ante esta situación, algunas estimaciones prevén que la tasa de pobreza infantil aumentará en los próximos años.

Pau Marí-Klose publicó en 2019 (previo a la pandemia actual del coronavirus) un ensayo que abordaba la problemática desde sus raíces, donde explicaba todas las consecuencias, aportando además propuestas de políticas públicas para revertir esta lacra social. El autor ofrece todos sus conocimientos, adquiridos a lo largo de sus años como investigador en la materia desde una perspectiva sociológica, y toda su experiencia, tras haber sido alto comisionado por la lucha contra la pobreza infantil del Gobierno español. Es por ello que, a lo largo del texto, muestra al lector la evidencia de la literatura especializada, tanto artículos científicos como informes, así como explica experiencias y casos de éxito en otros países. En este sentido, el libro combina un ensayo muy bien documentado y argumentado con la visión en primera persona de un *policymaker*. Y vista la actual situación, es un libro de plena actualidad.

**¿Qué es la pobreza?**

En el primer capítulo, Pau Marí-Klose nos introduce sobre qué es la pobreza y en qué consiste. Su principal objetivo es caracterizar las situaciones de vulnerabilidad económica y de exclusión social y desmontar el mito de que la pobreza sólo la sufren aquellas personas desnutridas, sin ningún tipo de recurso económico y sin una vivienda. Lejos de la realidad, la pobreza resulta una coyuntura relativa al contexto y a la sociedad de referencia en un momento del tiempo concreto. Eso significa que no es una medida absoluta y, en consecuencia, las situaciones de vulnerabilidad pueden ser distintas en un país u otro, o en un momento de la historia u otro. Las necesidades básicas que una persona tiene que cubrir vienen determinadas por la sociedad más cercana. Es en este punto donde el estado de bienestar y el sistema de protección social de cada país juega un papel importante para evitar estas condiciones y que se produzcan mayores diferencias entre la población más acomodada y la más vulnerable. De este modo, hay países donde existe

una buena respuesta pública ante la pobreza, pero hay otros en que el sistema no está diseñado de forma apropiada, y las políticas no buscan o no consiguen combatir estas situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Otro punto clave es que la experiencia de la pobreza va más allá de la falta de recursos económicos. La privación material viene acompañada de las experiencias personales de cada individuo: situaciones de estrés, sentimiento de vergüenza, bajo estado anímico, baja autoestima. En definitiva, sufren peor salud mental, pero también física, ya que también de ello se derivan más enfermedades. Además, sus funciones cognitivas se pueden ver alteradas por las preocupaciones y el estrés, lo que puede suponer no tomar decisiones con claridad ni poder planificar más allá del corto plazo. En especial se ven alteradas las decisiones económico-financieras. Todo esto conduce a entrar en una espiral negativa que dificulta aun más salir de la pobreza y conseguir recursos económicos. Resulta curioso que la literatura documente que estas experiencias subjetivas, estas dificultades para tomar decisiones y este deterioro de salud sean comunes en las personas en situación de pobreza, independientemente del lugar y el momento en que se encuentren. Además, la sociología recoge que la pobreza es una experiencia colectiva que se vive en comunidad y rodeada de personas en la misma situación.

### **La pobreza infantil**

En el segundo capítulo, el autor ya entra en la materia principal del libro, la pobreza infantil, con un doble objetivo: exponer los distintos factores que han conducido a un aumento de la pobreza infantil en los países europeos y qué consecuencias produce, tanto en los individuos como en la sociedad. Es éste el punto de partida para combatir la vulnerabilidad en la infancia. Por una parte, las consecuencias aportan justificaciones para actuar y, por otra, los factores identificados ayudan a entender el problema que hay que solucionar. En definitiva, la pobreza es un proceso acumulativo de diferentes factores que empeora la situación de las personas, en especial la de los menores.

Como muchos de los problemas sociales, la pobreza infantil y su incremento es producto de múltiples causas. En primer lugar, en las últimas décadas, la población mayor de 65 años ha visto mejorar su calidad de vida con prestaciones de jubilación más generosas gracias a mayores bases de cotización, al haber tenido vidas laborales más estables y un aumento del valor real de las pensiones. Además, el aumento de su peso demográfico ha ido ligado a un aumento de recursos del Estado y a un mayor interés electoral por parte de los partidos políticos. En ese sentido, la infancia, que no puede participar en las elecciones, no se ve tan presente en los programas electorales. En contraposición, la atención a los niños, niñas y adolescentes (NNA) se ha visto inalterada o incluso disminuida durante las últimas décadas.

En segundo lugar, la institución de la familia ha sufrido profundas transformaciones en las últimas tres o cuatro décadas, que han dado a lugar a nuevas tipologías de hogar. Las tasas de divorcios y separaciones han aumentado considerablemente, lo que ha conllevado a un incremento de familias monoparentales, y esto puede suponer que los ingresos del hogar disminuyan. Esta tipología de hogares había sido habitualmente monomarental y, por tanto, el sueldo que abandonaba el hogar era el del hombre, tradicionalmente el principal sustento económico de la familia. Además, los sistemas de protección social para las familias y los menores han sido insuficiente para hacer frente a los cambios socio-demográficos.

En tercer lugar, en los últimos años se ha producido un fuerte aumento del coste de la vivienda. Esto ha supuesto que una mayor proporción de los ingresos del hogar haya ido

dedicada al alquiler o a la hipoteca y, en consecuencia, la renta disponible para los gastos familiares se disminuía. A este suceso se le une la precarización del mercado laboral, en dos dimensiones: incremento de la temporalidad de los contratos y disminución de los salarios. En suma, aumentan los gastos y disminuyen los ingresos, lo que ha afectado en especial a los hogares con menores, ya que los recursos económicos hay que repartirlos entre más personas.

La segunda parte del capítulo aborda la experiencia de la pobreza infantil y la multitud de consecuencias de vivir en un hogar en riesgo de exclusión social. Pau Marí-Klose señala que hay tres grandes líneas de investigación sobre el tema. La primera analiza el impacto que tiene vivir en un clima familiar conflictivo durante la infancia. La evidencia muestra que la escasez de recursos económicos provoca situaciones de estrés que deteriora el ambiente familiar: discusiones, conflictos de pareja o entre los progenitores y los menores, falta de atención necesaria por parte de los padres... Y estas situaciones pueden conducir a incrementar el estrés de los NNA y que no reciban las estimulaciones necesarias para el desarrollo de sus capacidades cognitivas. Además, los menores más desfavorecidos suelen reportar mayores problemas de sociabilidad: tienen mayor dificultad para establecer relaciones con sus iguales, sufren más acoso o suelen verse más envueltos en conflictos.

Otra línea de investigación estudia el efecto de las condiciones de las viviendas y los barrios. La falta de recursos económicos suele derivar en vivir en espacios más pequeños y en malas condiciones. La literatura relaciona estas condiciones deficientes de la vivienda con problemas de salud, problemas en el desarrollo infantil y bajo rendimiento en el centro escolar. En este punto, el autor recalca la dificultad de estos estudios en encontrar un vínculo causal. Además, las viviendas suelen localizarse en zonas más contaminadas, y esto se relaciona, por tanto, con problemas de salud y del comportamiento. Finalmente, la tercera línea de investigación se centra en que las situaciones de estrés en la infancia provocan problemas de salud, tanto físicos como mentales, en el presente y en la etapa adulta.

### **¿Por qué actuar?**

En el tercer capítulo, el autor aporta argumentos que justifican la actuación del estado de bienestar para combatir las desventajas sociales de los más pequeños. Los niveles de pobreza infantil en España son anómalos si se comparan con los países europeos de su entorno. Además, organismos internacionales de prestigio han reiterado en contadas ocasiones el profundo problema que tiene nuestro país en este aspecto. Por ello, Marí-Klose realiza un diagnóstico de la pobreza infantil en España y de su evolución a lo largo de los últimos años. Utiliza recursos gráficos para exponer la tasa de riesgo de pobreza cruzadas con diferentes variables, como, por ejemplo, grupo de edad, intensidad de trabajo del hogar, tipología de hogar. Los datos muestran que los menores de edad son los que sufren mayor exclusión social y que las tasas de pobreza son mayores en los hogares con menores que en los hogares sin. Además, destaca que los hogares con hijos se ven más afectados por una baja intensidad de trabajo de sus progenitores que los hogares sin ningún NNA. Para concluir este diagnóstico, el autor presenta un gráfico de la tasa de pobreza por grupo de edad antes y después de los gastos en vivienda. En él se ve la fuerte incidencia del coste de la vivienda en el riesgo exclusión social en todas las edades, en especial en los jóvenes y los mayores de 65 años.

En la segunda parte de este capítulo, Pau Marí-Klose aporta cinco argumentos de por qué hay que combatir la pobreza infantil en cualquier sociedad. El primer punto se basa

en la justicia social y en el derecho de cualquier niño a tener una vida digna. Este argumento se fundamenta en el hecho de que el azar determina el lugar de nacimiento y las condiciones socioeconómicas de la familia. Por otro lado, en la infancia las personas tienen poco poder de decisión sobre sus vidas. Por eso, no se le puede atribuir ninguna responsabilidad a un menor de edad de estar en riesgo de pobreza y, por tanto, por justicia social, se debería ayudar a los más desfavorecidos. El segundo punto justifica que se tiene que asegurar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Ya se ha mencionado las consecuencias de vivir en riesgo de exclusión. De modo que, desde pequeños, ya se limitan las oportunidades de los NNA más desfavorecidos de la sociedad, sin permitir que desarrollen todo su potencial y su talento.

El tercer argumento hace referencia al beneficio social que conlleva reducir la pobreza infantil y la desigualdad en un territorio. Se reduce la marginalización, la violencia y los conflictos sociales y, por tanto, la sociedad está menos fragmentada y más cohesionada. El cuarto punto, siguiendo con los beneficios, se centra en el económico. Partiendo de la base de que los recursos destinados a la lucha contra la pobreza no son gastos, sino inversiones, el conjunto de la sociedad obtiene retornos económicos muy altos en un futuro por las inversiones realizadas en la infancia durante el presente. Una sociedad con menos pobreza y desigualdad tiende a estar más formada y preparada, no se desperdicia el talento singular de las personas y aumenta la productividad del país. En última instancia, una sociedad más productiva repercute positivamente en el crecimiento económico. Además, al tener más población activa ocupada, se destinan menos recursos en prestaciones por desempleo. El estado de bienestar también ahorra en gastos de protección social, en gastos sanitarios y en conflictos sociales relacionados con las situaciones de vulnerabilidad. Finalmente, se manifiesta sobre la solidaridad intergeneracional. Disminuir el número de NNA en riesgo de pobreza ayuda a mantener la sostenibilidad del estado de bienestar a largo plazo. Durante su trayectoria laboral, todo adulto aporta recursos a las arcas públicas para financiar las pensiones. La confianza en este sistema se basa en el pacto intergeneracional de que la siguiente generación de trabajadores financiará las pensiones de los que hoy están trabajando. Por ello, la lucha contra la pobreza infantil contribuye a la estabilidad de este pacto y a evitar que se pueda quebrar.

### **Experiencias de otros países**

En el cuarto capítulo, el autor describe brevemente algunos estados de bienestar de diferentes países que sirven como modelos para reducir las condiciones de vulnerabilidad de los menores. En primer lugar, recalca el gran papel de los países escandinavos y, en particular, en el sistema de protección social de las familias e infancia. En Noruega, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo hace unas décadas propició un conjunto de medidas que benefició a la infancia. Para garantizar la oportunidad de que los dos progenitores trabajen, evitar la discriminación de la mujer y garantizar la igualdad de género en el proceso de conciliación, el gobierno noruego implementó una batería de medidas: permisos parentales iguales, servicios públicos de cuidados y escuelas infantiles y ayudas económicas para la conciliación en edades tempranas. En ese sentido, la literatura evidencia los beneficios para los niños de la escolarización en esas edades tempranas. Y es aquí cuando el autor recalca que la implementación de estas políticas tiene que ir acompañadas de un sistema fiscal importante, el respaldo de la sociedad y la voluntad de financiar el gran coste que supone.

El gobierno británico de Tony Blair es otro de los ejemplos de buenas prácticas que presenta el autor. A partir del 1999, apostó fuertemente por diseñar una estrategia para erradicar la pobreza infantil. Entre las medidas más importantes destacan la apuesta por

la empleabilidad de los adultos más vulnerables, el aumento del salario mínimo, el incremento de la prestación del permiso retribuido de maternidad y el de la prestación por hijo a cargo, los servicios para familias e infancia y la implementación de un programa educativo de 0-3 años en zonas de alta complejidad social. Una de las grandes apuestas de este gobierno fue la educación inclusiva y de calidad para reducir la pobreza infantil. En definitiva, todo este trabajo político tuvo su fruto, y las tasas de pobreza infantil disminuyeron considerablemente.

No mencionaremos aquí más ejemplos de otros países presentes en el libro, sino la afirmación del autor de que la preocupación por la pobreza infantil en la UE empezó al inicio del presente siglo. En ese momento se empieza a ver la inversión en la infancia como una herramienta para reducir la pobreza y desigualdades, incrementar el bienestar de la sociedad y potenciar el crecimiento económico de los países. Es en 2013 cuando la inversión en infancia pasa a primer plano, con la publicación del informe «Investing in Children: Breaking the Cycle of Disadvantage» de la Comisión Europea (CE). El informe contiene recomendaciones para los estados miembros de implementar políticas sociales dirigidas a la infancia. Por último, a día de hoy, la CE está estudiando la posibilidad de desarrollar un programa llamado «Garantía infantil» para destinar fondos europeos a la infancia y así dar un paso al frente en esta lucha.

### **Propuestas de políticas para combatir la pobreza**

En el quinto y último capítulo se proponen políticas públicas para reducir la pobreza infantil, y así mejorar el bienestar de la sociedad y reducir la desigualdad socioeconómica en España. El autor nos recuerda que la pobreza comienza con la insuficiencia de recursos económicos del hogar para cubrir las necesidades básicas establecidas en la sociedad de referencia. Por tanto, la pobreza infantil se refiere a la falta de recursos económicos de los adultos al cargo de los menores. A partir de ahí, se desencadena un proceso acumulativo de factores que agravan el problema. La lucha para combatir la pobreza infantil en un territorio se puede abordar con políticas generalistas, dirigidas en especial a la institución familiar para reducir la privación material. No obstante, estas políticas pueden complementarse con políticas específicas, es decir, medidas dirigidas directamente a la infancia, para combatir la exclusión social y paliar los efectos de la falta de recursos.

En primer lugar, Marí-Klose divide las políticas generalistas en tres grandes bloques. El primero consiste en fomentar la participación laboral de los progenitores. Sin embargo, no sólo se trata de potenciar la empleabilidad, sino también de mejorar la calidad de los trabajos de los adultos desfavorecidos. De esa forma se garantiza la generación de ingresos para el hogar de forma más sostenible y estable en el tiempo. Estas medidas empiezan con políticas de formación y mejora del capital humano, para así aumentar las oportunidades laborales. El segundo bloque consiste en aportar recursos económicos a los hogares más vulnerables. El obtener ingresos ayuda a cubrir las necesidades básicas y disminuir las preocupaciones y el estrés de los adultos del hogar, de forma que se paliar las consecuencias negativas mencionadas anteriormente. Estos recursos se pueden materializar en prestaciones económicas directas, universales o selectivas, o en prestaciones focalizadas. En esto entraría el diseño de un sistema de garantía de ingresos sólido y generoso, como sería el Ingreso Mínimo Vital. Por último, el tercer bloque busca externalizar los costes de la familia en la crianza. Parte de la realidad de los elevados costes de cuidar a un menor. Por tanto, la calidad y la cantidad de cuidados que recibe la infancia depende básicamente de los ingresos de los mayores más las ayudas públicas. Para corregir esta situación, se necesita financiación que garantice la alimentación de los niños vulnerables mediante becas comedor durante todo el año, ayudas para material y trans-

porte escolar y para actividades extraescolares. Además, también es necesario financiar programas de verano en que los más desfavorecidos participen en actividades socioeducativas.

En segundo lugar, el autor divide las políticas específicas en cuatro líneas de actuación. La primera se centra en los niños y las niñas. La literatura evidencia que las brechas socioeconómicas empiezan en edades muy tempranas y que la escolarización en escuelas infantiles de 0-3 años tienen importantes beneficios para los más desfavorecidos. Por eso, se debe incidir en la escolarización en esa edad y reforzar la de 3-5 años, donde España ya ha hecho progresos. Marí-Klose hace hincapié en que es importante la calidad del servicio educativo. La segunda línea de actuación se centra en las familias, en incentivar comportamientos beneficiosos de los progenitores en situaciones de vulnerabilidad y dinámicas familiares positivas. En algunos países existen programas de acompañamiento sociosanitario de familias con menores en riesgo de exclusión social. Las evaluaciones de estos programas muestran grandes beneficios en el bienestar y la educación de los menores más vulnerables. De hecho, en España existe algún programa que ofrece acompañamiento a familias con bebés, pero aún son escasos. Por su parte, la tercera línea trata sobre intervenciones en el centro escolar. España destaca por tener elevados niveles de segregación escolar por origen socioeconómico y porque los estudiantes pueden repetir de curso. La literatura ha demostrado que son dos prácticas negativas para los NNA más desfavorecidos, pues ello amplía la brecha socioeducativa. Las medidas consistirían en políticas para combatir la segregación, aportar más recursos a los centros de alta complejidad, actividades extraescolares para los menores en desventaja social, programas educativos durante el verano para los más desfavorecidos e implementación de prácticas pedagógicas inclusivas en el aula, así como eliminar la repetición de curso. Finalmente, la cuarta línea consiste en asegurar entornos comunitarios estimulantes y beneficiosos para la infancia. Todas estas medidas buscan eliminar los entornos conflictivos y garantizar actividades de entretenimiento en el barrio; pueden ser regeneración del espacio público y urbano de las zonas más desfavorecidas, pero intentando evitar la gentrificación.

### **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – Agenda 2030**

En la última parte del libro, el epílogo, el autor pone en contexto la lucha contra la pobreza infantil en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (NU). Estos objetivos están sirviendo de referencia en los diferentes niveles administrativos de nuestro país. Por tanto, aporta otro argumento sólido para tomar medidas que solventen la situación, y que así España y sus territorios puedan cumplir con los objetivos. Además, éstos ofrecen un marco óptimo para diseñar la hoja de ruta para reducir la pobreza infantil y la desigualdad.

La lucha contra la pobreza infantil se puede enmarcar en seis de los diecisiete ODS: en los objetivos 1, 2, 3, 4, 10 y 11. El 1 hace referencia a reducir la pobreza de hombres, mujeres y menores de edad. En este sentido, nuestro sistema de protección social necesita mejorar para revertir las deficiencias existentes y poder ayudar a la población más desfavorecida. El 2 plantea reducir el hambre y garantizar una alimentación sana, equilibrada y suficiente. Este objetivo es muy relevante en nuestro país, dadas las altas tasas de obesidad infantil, con especial incidencia en las familias con menos recursos. El Objetivo 3, relacionado con el anterior, consiste en garantizar una vida sana y el bienestar para todas las personas. Como hemos visto anteriormente, la experiencia de la vulnerabilidad socioeconómica se relaciona con problemas de salud, física y mental, y en el bienestar subjetivo. Por tanto, las medidas para reducir la pobreza también aportan esfuerzos para

cumplir este objetivo. El 4 se refiere a la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Para lograr una buena educación en España es necesario implementar políticas que reviertan la segregación escolar, disminuyan las brechas educativas, garanticen actividades extraescolares y potencien programas de apoyo socioeducativo durante el verano, entre otras muchas medidas. El 10 consiste en reducir las desigualdades existentes entre los territorios y dentro de cada uno de ellos, para así evitar los efectos negativos en la sociedad. Y, por último, el objetivo 11 también se enmarca en la lucha contra la pobreza infantil, ya que pretende lograr ciudades sostenibles, seguras e inclusivas. Esto incluye mejorar el acceso a la vivienda digna, mejorar los barrios más desfavorecidos y, en definitiva, crear un entorno más favorable para todos.

\* \* \*

**Pau Marí-Klose** es doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en la Universidad de Chicago. Actualmente es profesor de Sociología en excedencia en la Universidad de Zaragoza y diputado en el Congreso, y previamente dirigió el alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil durante siete meses.

Reseña de **Pere A. Taberner**, investigador en economía en KSNET y estudiante de doctorado en Economía en la Universitat de Barcelona y en el Instituto de Economía de Barcelona (IEB).



